

Gaceta departamental

EDICIÓN DE 64 PÁGINAS

No.18.970

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admon Postal Nal. - Porte Pagado

SUMARIO RESOLUCIONES DICIEMBRE 2011

NUMERO	FECHA	PAGINA	NUMERO	FECHA	PAGINA
047627	Diciembre 01 de 2011	2	047940	Diciembre 02 de 2011	27
047628	Diciembre 01 de 2011	3	047943	Diciembre 02 de 2011	29
047629	Diciembre 01 de 2011	3	047960	Diciembre 02 de 2011	30
047630	Diciembre 01 de 2011	5	048008	Diciembre 02 de 2011	33
047631	Diciembre 01 de 2011	7	048009	Diciembre 02 de 2011	34
047632	Diciembre 01 de 2011	9	048014	Diciembre 05 de 2011	36
047633	Diciembre 01 de 2011	10	048015	Diciembre 05 de 2011	43
047634	Diciembre 01 de 2011	12	048016	Diciembre 05 de 2011	49
047635	Diciembre 01 de 2011	13	048017	Diciembre 05 de 2011	55
047914	Diciembre 01 de 2011	15	048018	Diciembre 05 de 2011	62
047916	Diciembre 01 de 2011	17			

RESOLUCIONES *Diciembre de 2011*



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA GENERAL

Imprenta Deptal. de Antioquia

Dr. Sergio Arroyave Maya
Director

Antioquia para todos
¡manos a la obra!



**ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO**



RESOLUCION No. 047627

01 DIC 2011

Por medio de la cual se delega una representación.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones institucionales y legales, en especial de las que le confiere el Decreto No. 1876 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que el **Centro de Atención y Rehabilitación en Salud Mental de Antioquia "CARISMA"**, es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a prestar servicios de salud, del orden departamental y perteneciente al subsector oficial del sector salud.
2. Que conforme al artículo 7 del Decreto 1876 del 3 de agosto de 1994, uno de los miembros de la Junta Directiva de la ESE en representación del estamento político administrativo, es el Secretario Seccional de Salud de Antioquia o su delegado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DELEGAR en la doctora **PAOLA ANDREA SALAZAR GALLEG0,** Directora de la Dirección de Calidad y Red de Servicios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la representación del Secretario Seccional de Salud de Antioquia en la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado del orden departamental ESE **Centro de Atención y Rehabilitación en Salud Mental de Antioquia "CARISMA"**, que ha de celebrarse el día 01 de diciembre de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Medellín, a los 01 DIC 2011

**EL SECRETARIO SECCIONAL DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

CARLOS MARIO RIVERA ESOBAR

**RESOLUCIÓN 047628**

01 DIC 2011

Por medio de la cual se modifica la Resolución N°042958 del 21 de noviembre de 2011

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por los Decretos 01 de 1984 y 412 del 6 de marzo de 1992 y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución N°042958 del 21 de noviembre de 2011, el Secretario Seccional de Salud de Antioquia, autorizó el pago de la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias.
2. Que por error se autorizó cancelar a las HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN CLÍNICA EL ROSARIO, un valor de ciento ochenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos (\$182.444.559), siendo lo correcto CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L (\$182.447.559).

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución N°042958 del 21 de noviembre de 2011, en el sentido de que el valor correcto a pagar a las HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN CLÍNICA EL ROSARIO correcta es **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L (\$182.447.559).**

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los 01 DIC 2011

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCION No. 047629

01 DIC 2011

Por medio de la cual se cancela una personería jurídica.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE



ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 1088 de 1991 y Resolución 009921 de 1993, y

CONSIDERANDO:

1. Que el **PRESIDENTE DE LA REPUBLICA** expidió el Decreto 1088 del 25 de abril de 1991, por medio del cual se reglamenta el régimen de las Instituciones del Subsector Privado del Sector Salud.
2. Que las Instituciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de salud, están sometidas al control y vigilancia del Estado en los términos indicados en el Decreto 1088 de 1991.
3. Que el artículo 19 del mismo estatuto delegó en los Gobernadores de los Departamentos, a través de las Direcciones Seccionales de Salud, el reconocimiento de Personerías Jurídicas y la Aprobación de reformas estatutarias de las Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que tengan por finalidad el fomento, la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.
4. Que el artículo 55 del Decreto 1088 de 1991 delegó en las autoridades competentes para otorgar personería jurídica, la facultad de cancelarla cuando se presente solicitud por el interesado de la Corporación, Fundación, Asociación o Instituciones sin ánimo de lucro y cuando se trate que estas no estuvieren cumpliendo con los objetivos estatutarios; igualmente, cuando se determine que no tiene suficiencia patrimonial para el desarrollo de las actividades de tal entidad.
5. Que el Representante Legal y Liquidador de la CASA DE ATENCION EL BUEN SAMARITANO "IPS CASALUD" con domicilio en la ciudad de Medellín, mediante comunicación del 15 de Noviembre de 2011 solicita la cancelación de la Personería Jurídica, previa la disolución y liquidación de la Corporación por no estar cumpliendo con su objetivo.
6. Que la CASA DE ATENCION EL BUEN SAMARITANO "IPS CASALUD", presentó los documentos que tienen que ver con el proceso de disolución y liquidación, los cuales corresponden al acta de la reunión extraordinaria realizada el día 29 de noviembre de 2010 donde toman la decisión de disolución y liquidación de la Corporación, Acta de liquidación y estados financieros Balance General y Estado de resultados debidamente firmados por el revisor fiscal, cancelación de las obligaciones con terceros, liquidación y pago de impuestos, los cuales fueron debidamente avalados por el Profesional especializado de Contabilidad de Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
7. Que analizados los documentos mencionados en el numeral anterior, la CASA DE ATENCION EL BUEN SAMARITANO "IPS CASALUD" ha culminado el proceso de disolución y liquidación conforme a las normas que rigen para estos casos.
En mérito de lo antes expuesto,

RESUELVE: 047629

ARTICULO PRIMERO: Cancelar la Personería Jurídica que le fue otorgada a la CASA DE ATENCION EL BUEN SAMARITANO "IPS CASALUD, mediante Resolución No.9817 del 18 de agosto de 2005 por medio de la cual el Departamento de Antioquia-DSSA, le otorgó la personería jurídica

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al interesado en los términos del Decreto 01 del 2 de enero de 1984.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto en la Gaceta Departamental a cargo de la CASA DE ATENCION EL BUEN SAMARITANO "IPS CASALUD y el pago de los respectivos impuestos.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución surte efectos legales a partir de la publicación en la Gaceta Departamental.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín a los

01 DIC 2011



CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR

Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCION N° 047630
01 DIC 2011

Por medio de la cual se concede Personería Jurídica, se inscribe el Representante Legal y Revisora Fiscal de la entidad denominada "CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR CASA HOGAR LA ALEGRÍA".

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 19 del Decreto 1088 de 1991, el cual fue subrogado por el Decreto 996 del 29 de mayo de 2001, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 1088 del 25 de abril de 1991, por medio de la cual se reglamenta el régimen de las instituciones del Subsector privado del Sector Salud.
2. Que las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e Instituciones sin ánimo de lucro que presten servicios de salud, están sometidas al control y vigilancia del Estado en los términos indicados en el Decreto 1088 de 1991.
3. Que el artículo 1º del Decreto 996 del 29 de mayo de 2001 en concordancia con



el artículo 35 del Decreto 1088 de 1991, delegó en los Gobernadores a través de las Direcciones Seccionales de Salud, el reconocimiento de personerías jurídicas de Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones e instituciones de utilidad común y creadas por la iglesia católica de cualquier confesión religiosa sin ánimo de lucro, que tengan por finalidad el fomento, la prevención, diagnóstico, tratamiento recuperación y rehabilitación de la salud.

4. Que el día 30 de mayo de 2011, en el municipio de Medellín se constituyó una entidad sin ánimo de lucro denominada **"CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR HOGAR LA ALEGRÍA"**, se aprobaron los estatutos que han de regir la Corporación y se nombró el representante Legal en calidad de Presidente y como Revisor Fiscal, como consta en el Acta de Constitución del 30 de mayo de 2011.
5. Que **"EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR HOGAR LA ALEGRÍA"**, cumple con las condiciones de calidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y de capacidad técnico administrativa; conforme a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1088 de 1991, para el otorgamiento de la personería jurídica,

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER personería jurídica al **CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO HOGAR LA ALEGRÍA**, con domicilio en el municipio de Medellín.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR los Estatutos que regirán a la Institución expedidos en reunión del 30 de mayo de 2011, según Actas de Constitución y Nombramiento de los Dignatarios del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor Centro Hogar la Alegría.

ARTICULO TERCERO: INSCRIBIR como **REPRESENTANTE LEGAL** en calidad de Presidente al Prábitero **FABIAN EMILIO ORTEGA JIMÉNEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 71.675.335 de Medellín.

ARTICULO CUARTO: INSCRIBIR como **Revisora Fiscal** a la doctora **LUZ MARLENY BERRIO BARRERA** identificada con la cédula No. 32.305.096 de Bello y portadora de la Tarjeta Profesional No. 20.490T.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución en los términos del Decreto 01 de 1984, al Representante Legal de la mencionada Institución, haciéndole saber que contra el presente acto administrativo, proceden los Recursos de Reposición y Apelación ante el Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y ante el Gobernador de Antioquia, respectivamente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo, en la Gaceta Departamental a cargo del **CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYO CENTRO HOGAR LA ALEGRÍA** con domicilio en el municipio de Medellín y el pago de los respectivos impuestos.



ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución surte efectos legales una vez haya sido publicada en la Gaceta Departamental y se haya cancelado la tarifa correspondiente a este acto administrativo en el Banco Popular cuenta de ahorros No.18072008 – 8 denominada Fondos Comunes de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Medellín a los, 01 DIC 2011


CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCION 047631

01 DIC 2011

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y
CANCELACIÓN DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DENOMINADA
FUNDACION SALUD Y VISION**

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA,
en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por la ley 10 de 1990,
El Decreto 1088 de 1991 y Resolución 009921 de 1993, y

CONSIDERANDO:

1. Que la FUNDACION SALUD Y VISION con domicilio en el municipio de Medellín, es una entidad sin ánimo de lucro, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución N°09982 del 9 de Mayo de 2006, expedida por el Secretario Seccional de Salud de Antioquia.
2. Que los estatutos de la institución fueron aprobados mediante Resolución N°09982 del 9 de mayo de 2006, emanada de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4º. de los estatutos, el objeto de la FUNDACION SALUD Y VISION es contribuir al mejoramiento de la calidad de la salud Oftalmológica y otras especialidades médicas, así como prestar directamente el servicio de atención oftalmológica y demás especialidades en la región.
4. Que de acuerdo a la reunión de Asamblea extraordinaria de la Junta Directiva de la Fundación Salud y Visión, celebrada el 6 de septiembre de 2011, se concluye liquidar la fundación, tal como consta en Acta N°003 de la misma fecha.



5. Que según lo establece el numeral 1° del artículo 54 del Decreto 1088 de 1991, la falta de capacidad Técnico administrativa, insuficiencia patrimonial y de calidad tecnológica y científica que imposibilita la adecuada prestación del servicio público de Salud, es causal para determinar la disolución y liquidación de la entidad sin ánimo de lucro denominada de la FUNDACION SALUD Y VISION.

Por lo anteriormente expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese la Disolución y Liquidación de la entidad denominada **FUNDACION SALUD Y VISION** con domicilio en el municipio de Medellín – Antioquia, con personería Jurídica reconocida mediante Resolución N°09982 del 9 de mayo de 2006, emanada de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.

ARTICULO SEGUNDO: Nombrar a la señora **ANGELA MARIA CARDENAS**, con cédula de ciudadanía N°43.758.914 de Envigado, como **LIQUIDADORA** de la **FUNDACION SALUD Y VISION**, para lo cual deberá tomar posesión ante la Directora de Asuntos Legales de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, dentro de los Diez (10) siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO. Durante el proceso de liquidación se aplicará a la **FUNDACION SALUD Y VISION**, las disposiciones contenidas en la Resolución 009921 de 1993 expedida por el Ministerio de la Protección Social y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan en los aspectos no contemplados en esta resolución se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y Civil sobre esta materia, en cuanto sean compatibles.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente Resolución a la señora **ANGELA MARIA CARDENAS**, liquidadora de la **FUNDACION SALUD Y VISION**, para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido de la present Resolución al Representante Legal de la institución denominada **FUNDACION SALUD Y VISION**, o quien haga sus veces o a su apoderado dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos a partir de su ejecutoria.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín, a los 01 DIC 2011


CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

**RESOLUCION N° 047632**
01 DIC 2011

Por la cual se autoriza el pago de atenciones de salud ordenadas mediante fallo de tutela.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Leyes Nos. 10 del 10 de enero de 1990 y 715 del 21 de diciembre de 2001 y,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en las Leyes 10 de 1990 y 715 de 2001, el Estado tiene el deber de gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.
2. Que el Decreto No. 2591 del 19 de noviembre de 1991, mediante el cual se reglamenta la Acción de Tutela consagrada en la Constitución Política, prescribe en su artículo 23 que "cuando la solicitud se dirija contra una acción de autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible".
3. Que el artículo 43 numeral 43.2.2 de la Ley 715 de 2001, consagra dentro de las competencias del Departamento de Antioquia – Dirección Seccional de Salud y Protección Social, la prestación de los servicios de salud y salud mental a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, para lo cual, permite financiarlos con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos.
4. Que la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, incluyó en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el rubro para cubrir y dar cumplimiento a las atenciones de salud ordenadas mediante fallos de tutela proferidos por los diferentes despachos judiciales del Departamento de Antioquia.
5. Que en cumplimiento a Fallos de Tutela, la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia cancelar los servicios de salud, consistentes en atención médica especializada de endocrinología, realizados a población vinculada del departamento de Antioquia, y prestados por **LA DOCTORA MARIA PATRICIA HORMAZA ANGEL**, según Acta de Pago N°2530 del 18 de octubre de 2011.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR conforme al Manual Tarifario expedido por el Ministerio de la Protección Social, reglamentado mediante el Decreto No. 2423 del 31 de diciembre de 1996 y con cargo al rubro A.52.3.2.4/1116/0-3031/120208000/013120 denominado SGP – SALUD OFERTA Tutelas No Poss Red Privada, la cancelación de los servicios de salud ordenados mediante Fallos de Tutela a la población vinculada del

departamento de Antioquia, durante el mes de agosto de 2011, prestados por **LA DOCTORA MARIA PATRICIA HORMAZA ANGEL** por un valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L (\$941.800)**.

ARTÍCULO SEGUNDO. Exigir para la cancelación de los servicios, la presentación por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de la respectiva cuenta de cobro y el acta de pago expedida por el interventor asignado de la Dirección de Atención a la Personas de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde conste que los servicios prestados se ajustan a los términos de la presente Resolución.

Comuníquese y Cúmplase.

Dada en Medellín a los 01 DIC 2011


CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 047633
01 DIC 2011

Por la cual se autoriza el pago de la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 de la Ley 10 de 1990 y 159 de la Ley 100 de 1993, el Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del Territorio Nacional la atención inicial de urgencias y la atención de urgencias, entendidas en los términos del Decreto 412 de 1992 y de la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social.

2. Que en desarrollo del Decreto 412 de 1992 expedido por el Presidente de la República, el cual reglamentó parcialmente los servicios de urgencias, corresponde a las Direcciones Seccionales de Salud, pagar los servicios de atención inicial de urgencias y de atención de urgencias de segundo y tercer nivel, a las personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando la atención haya sido prestada en instituciones privadas con las que la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia no tenga contrato o cuando la residencia habitual de la persona que haya recibido la atención no coincida con la jurisdicción de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia donde se localiza la institución pública o privada que haya prestado la atención; para lo cual deberá apropiar los recursos que sean necesarios.

3. Que el Artículo 67 de la Ley 715 de 2001, establece que la "Atención inicial de urgencias



debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios prestados no se requiere contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se efectuará mediante resolución motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y deberá cancelarse máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la factura de cobro”.

4. Que en observancia al artículo 10 del Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, incluyó en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el rubro de Urgencias para cubrir la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias en aquellos pacientes que son de nuestra competencia.

5. Que **URÓLOGOS Y GINECÓLOGOS DE COLOMBIA S.A. UROGINE S.A.**, presentó facturación por valor de \$1.820.000 por servicios de salud prestados a la población vinculada del departamento de Antioquia, durante el mes de octubre y el interventor asignado de la Dirección de Atención a las Personas autorizó un pago de \$1.644.500, según Acta de Pago N°3-2011 del 22 de noviembre de 2011.

En mérito de lo expuesto, este despacho

047633

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR conforme al Manual Tarifario expedido por el Ministerio de la Protección Social, reglamentado mediante el Decreto N°2423 del 31 de diciembre de 1996 y con cargo al rubro A.52.3.2.4/1116/0-2611/120208000/013127 denominado RENTAS CEDIDAS DIFERENTES A LEY 643 SGP Urgencias No POSS Red Privada, la cancelación de los servicios de Atención Inicial de Urgencias y Atención de Urgencias prestados a la población vinculada del departamento de Antioquia, durante el mes de octubre de 2010, por **URÓLOGOS Y GINECÓLOGOS DE COLOMBIA S.A. – UROGINE S.A.**, por un valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M.L (\$1.644.500).**

ARTÍCULO SEGUNDO. Exigir para la cancelación de los servicios, la presentación por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de la respectiva cuenta de cobro y el acta de pago expedida por la Dirección de Atención a las Personas de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde conste que los servicios prestados se ajustan a los términos de la presente Resolución.

Comuníquese y Cúmplase.

Dada en Medellín a los 01 DIC 2011


CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR

Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia



RESOLUCIÓN N° 047634
01 DIC 2011

Por la cual se autoriza el pago de la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 de la Ley 10 de 1990 y 159 de la Ley 100 de 1993, el Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del Territorio Nacional la atención inicial de urgencias y la atención de urgencias, entendidas en los términos del Decreto 412 de 1992 y de la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social.

2. Que en desarrollo del Decreto 412 de 1992 expedido por el Presidente de la República, el cual reglamentó parcialmente los servicios de urgencias, corresponde a las Direcciones Seccionales de Salud, pagar los servicios de atención inicial de urgencias y de atención de urgencias de segundo y tercer nivel, a las personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando la atención haya sido prestada en instituciones privadas con las que la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia no tenga contrato o cuando la residencia habitual de la persona que haya recibido la atención no coincida con la jurisdicción de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia donde se localiza la institución pública o privada que haya prestado la atención; para lo cual deberá apropiar los recursos que sean necesarios.

41. Que el Artículo 67 de la Ley 715 de 2001, establece que la "Atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios prestados no se requiere contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se efectuara mediante resolución motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y deberá cancelarse máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la factura de cobro".

4. Que en observancia al artículo 10 del Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, incluyó en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el rubro de Urgencias para cubrir la Atención inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias en aquellos pacientes que son de nuestra competencia.

5. Que **LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA**, presentó facturación por valor de \$88.043.807 por servicios de salud prestados a la población vinculada del departamento de Antioquia, durante los meses julio y octubre de 2010 y el interventor asignado de la Dirección de Atención a las Personas autorizó un pago de \$6.434.789, según Actas de Pago N°2161 y 2163 del 26 de agosto de 2011.

En mérito de lo expuesto, este despacho

047634

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR conforme al Manual Tarifario expedido por el Ministerio de la Protección Social, reglamentado mediante el Decreto N°2423 del 31 de diciembre de 1996 y al rubro A.52.3.6/1116/0-3031/120208000/013133 denominado SGP – SALUD – OFERTA Déficit Vigencias Anteriores, la cancelación de los servicios de Atención Inicial de Urgencias y Atención de Urgencias, durante el mes de julio de 2010, por **LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA** por un valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L (\$6.434.789)**.

ARTÍCULO SEGUNDO. Exigir para la cancelación de los servicios, la presentación por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de la respectiva cuenta de cobro y el acta de pago expedida por la Dirección de Atención a la Personas de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde conste que los servicios prestados se ajustan a los términos de la presente Resolución.

Comuníquese y Cúmplase.

Dada en Medellín a los 01 DIC 2011



CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR

Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCION No. 047635

01 DIC 2011

Por medio de la cual se concede una Licencia de Funcionamiento para un equipo de Rayos X.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

En ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 09 de 1979 y 10 de 1990 y en especial Resolución No.7584 del 7 de junio de 1991 del Ministerio de Salud y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución No. 9031 del 12 de julio de 1990, el Ministerio de Salud estableció los requisitos y condiciones de seguridad que debían cumplir las personas naturales y jurídicas que poseen equipos de Rayos X y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes, para obtener la respectiva Licencia de Funcionamiento.
2. Que el Ministerio de Salud, mediante Resolución No. 07584 del 17 de junio de 1991, delegó en los Servicios Seccionales de Salud de Antioquia, Boyacá, Caldas, Valle y Tolima, la facultad de expedir las Licencias de que trata la



Resolución No 9031 de 1990 y demás funciones.

3. Que el Decreto - Ley No. 2150 de 1995 por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública, no suprimió el trámite de la Licencia de Funcionamiento para fuentes emisoras de Radiaciones Ionizantes, ya que ellas se expiden a los equipos y no al establecimiento.
4. Que el **CONSULTORIO ODONTOLOGICO FRANCISCO JAVIER DEL VALLE AGUDELO**, ubicado (o) en la calle 28 A 81-15 del Municipio de **Medellin** por medio de su Representante Legal **FRANCISCO JAVIER DEL VALLE AGUDELO** con cedula No. 71575403 solicitó Licencia de Funcionamiento para los equipos de Rayos X.
5. Que la Dirección de Factores de Riesgo de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, después de analizar y evaluar la documentación presentada, emitió concepto técnico favorable para la expedición de la Licencia de Funcionamiento de los equipos de Rayos X, según estudio realizado por el Asesor en Protección Radiológica señor **MANUEL MONTOYA GONZALEZ**, realizado el **9 de noviembre de 2011** por cuanto cumple con los requisitos establecidos en la Resolución No. 9031 de 1990

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Funcionamiento para el equipo de Rayos X, al **CONSULTORIO ODONTOLOGICO FRANCISCO JAVIER DEL VALLE AGUDELO**, ubicado (o) en la calle 28 A 81-15 del municipio de **Medellin**, por intermedio de su representante legal **FRANCISCO JAVIER DEL VALLE AGUDELO** con cédula numero 71575403, el cual tiene las siguientes características:

cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá ser renovada, previo diligenciamiento de la solicitud respectiva y el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en las normas legales vigentes, con sesenta (60) días de antelación a su vencimiento.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución es válida siempre y cuando se mantengan las características y condiciones del equipo (s) contenidas en el estudio y la presente licencia.. en la Ley 09 de 1979 y los artículos 49 y 50 de la Ley 10 de 1990.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente la presente Resolución a **FRANCISCO JAVIER DEL VALLE AGUDELO**, en su calidad de Representante Legal, identificado con la cédula **71575403**, haciéndole saber que contra ella proceden los recursos de Reposición, ante el Director Seccional de Salud de Antioquia y el de Apelación ante el Ministro de Salud, conforme a lo establecido en el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DE ANTIOQUIA

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR

RESOLUCIÓN NÚMERO **047914**

(01 DIC 2011)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UN CRÉDITO PÚBLICO INTERNO,
ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
IDEA Y EL BANCO POPULAR S.A."**

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993, y el Decreto 1222 de 1986, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, las operaciones de crédito público se contratarán en forma directa.
2. Que el decreto 2681 de 1993, por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas, establece en su artículo 13 que la celebración de empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas, se rigen por lo señalado en los decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Que el artículo 219 del Decreto 1222 de 1986, "Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental", preceptúa:

"Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los organismos descentralizados departamentales serán aprobadas mediante resolución del Gobernador en la cual se establecerá la destinación del producto del empréstito, sus condiciones financieras y las garantías que se otorgarán."

4. Que el artículo 220 del citado decreto señala que la solicitud de aprobación debe ser presentada por el representante legal del organismo descentralizado, la cual deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

"1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y su sujeción a los planes y programas que esté adelantando la administración departamental, junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer."

2. Copia autenticada de la autorización de la junta o consejo directivo de la entidad para contratar el préstamo y otorgar garantías."

3. *Concepto favorable de la oficina de planeación departamental sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto.*
 4. *Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual certificado por el revisor o auditor fiscal de la entidad.*
 5. *Presupuesto de rentas y gastos de las vigencia en curso y sus adiciones y modificaciones legalmente autorizadas, junto con los balances de los dos últimos años.*
 6. *Minuta del contrato con la manifestación expresa del prestamista de que la acepta."*
5. Que la Junta Directiva del IDEA autorizó al Gerente General, la celebración y negociación de un empréstito, conforme lo dispuesto en el Acta número 009 del 17 de junio de 2009.
6. Que mediante oficio con radicado E 201100003311 del 25 de enero de 2011, se emitió Concepto Favorable por parte de la directora del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento de Antioquia, sobre la viabilidad de las obras a financiar con el empréstito objeto del contrato que se aprueba.
7. Que de conformidad con la certificación expedida por el Director Operativo de Contabilidad y Presupuesto del IDEA, el día 26 del mes de octubre de 2011, en la cual se informa que el presupuesto de gastos para la vigencia de 2011, se apropió una suma de dos mil novecientos veinte millones de pesos (COP\$ 2.920.000.000), para garantizar el servicio de la deuda, cifra que representa el 1.75% del total de los ingresos corrientes, o sea que sigue siendo inferior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias incluyendo el nuevo empréstito.
8. Que el Gerente General del IDEA, FRANCISCO JAVIER BELTRAN MONTOYA certificó, mediante comunicación del 29 de junio de 2011, que el empréstito será destinado para financiar los proyectos que atenderá el IDEA, de acuerdo a su objeto social, pero especialmente tratando de expandir la presencia del Instituto en las líneas estratégicas que se plantearon en la actual administración: Energía, Minería, Infraestructura y Reforestación.
9. Que el Gerente General del IDEA, FRANCISCO JAVIER BELTRÁN MONTOYA certificó, mediante comunicación del día 27 de Octubre de 2011, que el IDEA tiene capacidad suficiente para pignorar el saldo disponible de los ingresos que recibe de lo recaudado de la valorización Bello- Hatillo, peajes de la carretera Vía Oriente y peaje Túnel de Occidente, estas rentas pignoradas fueron cedidas por parte del Departamento de Antioquia al IDEA.
10. Que con base en las consideraciones anteriores, El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y el Banco Popular, han decidido celebrar un contrato de

empréstito de crédito de largo plazo por un monto de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ML (COP \$120.000.000.000).


11. El empréstito tendrá un plazo para su pago de siete (7) años incluido un período de gracia de dos (2) años para el pago de capital, contados a partir del desembolso. La amortización de capital se realizará en 20 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas. Durante todo el plazo del préstamo, se pagará sobre el saldo de capital adeudado, intereses corrientes iguales a la tasa de depósito a término fijo (DTF), más 2.70 puntos porcentuales trimestre anticipado (DTF+2.70 %T.A), pagaderos por su equivalente Trimestre Vencido. El pago se realizará en cuotas trimestrales a partir de la fecha del desembolso. Para estos efectos los intereses se liquidarán por su equivalente trimestre vencido y se pagarán el día de vencimiento o el día hábil siguiente, en caso de que el día siguiente no corresponda a un día hábil.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar la celebración de un contrato de empréstito, entre el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA y el BANCO POPULAR S.A. por la suma de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ML (COP \$120.000.000.000) a través de la línea de cartera ordinaria, en modalidad de crédito de largo plazo de deuda pública interna y pignoración de rentas, suma que entregará el deudor al perfeccionamiento del contrato y una vez se haya acreditado su publicación y registro en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El empréstito será destinado para financiar los proyectos que atienda el IDEA, de acuerdo a su objeto social.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Gobernador

RESOLUCIÓN NÚMERO 047916

01 DIC 2011

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN EN
PROCESO DISCIPLINARIO ADELANTADO EN CONTRA DEL SEÑOR HERNÁN
AUGUSTO HENAO MORALES**

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 734 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que a despacho para resolver se encuentra el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficioso del señor **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES** en contra del fallo disciplinario de primera instancia proferido por la Dirección de Control Interno Disciplinario el 24 de noviembre de 2011, mediante el cual se le impuso una sanción disciplinaria, recurso para cuya resolución se deberá tener en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES.**NOTICIA DE LOS HECHOS.**

El doctor CRISTIAN ZULUAGA GÓMEZ, Director de Servicios Generales – Gobernación de Antioquia –, mediante oficio radicado No. 023107 del 17 de julio de 2007, informó al Director de Control Interno Disciplinario que el señor **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES**, Trabajador Oficial de oficios varios de la Secretaría General, incurrió en presuntas irregularidades en los días: 27 de diciembre de 2006 (se presentó a laborar a las 9:00 a.m y en las horas de la tarde se ausentó del trabajo a las 2:30 p.m, regresando a las 5:00 p.m), el día 28 de diciembre de 2006 (se presentó a laborar a las 8:30 p.m, luego a las 10:00 a.m se retiró a cobrar quincena y regresó a las 2:30 p.m), el 29 de diciembre de 2006 (laborando normalmente hasta las 9:30 a.m, ausentándose del lugar de trabajo sin autorización y regresando a las 11:30 a.m en estado de embriaguez).

En la fecha 29 de octubre de 2009, mediante Auto CID 1449 de 2009, radicado 1337 – 2007, la Oficina de Control Interno Disciplinario, ordenó iniciar indagación preliminar contra el implicado.

En la fecha 18 de noviembre de 2009, el señor **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES**, presentó ante la oficina de la Dirección de Control Interno Disciplinario, versión libre y espontánea en relación con los hechos materia de queja.

Mediante oficio radicado No. 361537 del 22 de diciembre de 2009, la doctora **MARÍA EUGENIA CARMONA ESPINOSA**, Directora de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, remite a la Dirección de Control Interno Disciplinario, informe por una presunta irregularidad del servidor público **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES**, basada en el hecho ocurrido el 18 de diciembre de 2009, cuando éste se encontraba en su puesto de trabajo bajo estado de alicoramiento, hecho a raíz del cual se elevó un acta suscrita por los señores **JOSE JULIÁN ARANGO MEDINA** (Médico del área de Salud Ocupacional), **PAULA DUQUE JARAMILLO** (Médico del área de Salud Ocupacional), **ELKIN MORENO MUÑETÓN** (Técnico Operativo – Desarrollo Humano), **MARTHA HELENA BEDOYA VALENCIA** (Directora Administrativa de Servicios Generales) y **NICOLÁS MONTOYA CALLE** (Técnico – Jefe Área de Servicios Generales), mediante la cual se da fe que fue encontrado el señor **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES**, *“dormido sobre una mesa en su puesto de trabajo... al levantarse de la mesa, se observa problemas para la marcha, aliento alicorado y dificultad para la expresión verbal...”*.

En forma posterior, la doctora **MARÍA EUGENIA CARMONA ESPINOSA**, Directora de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional,

mediante oficio No. 008123 de enero 18 de 2010, informa a la Dirección de Control Interno Disciplinario, una nueva presunta irregularidad del servidor público HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES, consistente en hechos ocurridos el 15 de enero de 2010, reiteradamente por encontrarse bajo estado de alicoramiento en su sitio de trabajo, evento en el cual intervino el doctor JOSE JULIAN ARANGO MEDINA, Médico del área de salud Ocupacional, quien verificó el estado de embriaguez., observando al paciente *"...con dificultad para la marcha, aliento alcohólico..."*.

Mediante Auto CID 64 del 22 de enero de 2010, se declara la conexidad de la investigación aperturada mediante Auto CID 1449 de 2009 dentro de proceso radicado No. 1337 – 2007, con la documentación enviada por la doctora MARÍA EUGENIA CARMONA ESPINOSA (oficios radicados Nos. 361537 del 22 de diciembre de 2009 y 008123 del 18 de enero de 2010), con ocasión de los hechos sancionables en los cuales supuestamente incurrió el señor HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES, que tuvieron ocurrencia el 18 de diciembre de 2009 y el 15 de enero de 2010.

El 16 de abril de 2010, la oficina de Control Interno Disciplinario, emite el Auto CID 17/10, en el cual se hace constar que mediante oficio No. 162812 del 10 de marzo de 2010, la Directora de Servicios Generales, informó presuntas irregularidades en las cuales incurrió el señor HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES, quien supuestamente se encontraba en estado de alicoramiento y por tal motivo no fue permitido su ingreso al CAD el día 10 de marzo de 2010. Encontrándose un proceso activo radicado No. 1337 – 2007, por hechos similares y en virtud del principio de economía procesal, y por autorización del artículo 81 de la Ley 734 de 2002, se ordenó la acumulación de la queja contenida en el oficio No. 162812 del 10 de marzo de 2010, con el proceso radicado No. 1337 – 2007.

El 30 de septiembre de 2011, en Auto Verbal No. 10/11, la Oficina de Control Interno Disciplinario relacionó dos cargos al imputado, a saber:

Cargo Uno: *"... al encontrarse en estado de embriaguez en su sitio de trabajo los días 29 de Diciembre de 2006, 18 de diciembre e 2009, 15 de enero de 2010 y marzo 10 de 2010; posiblemente infringió los Artículos 23 y 34 numerales 1 y 2, 35 numeral 1 y 48 de la Ley 734 de 2002; conducta con la cual se produjo un posible incumplimiento de sus deberes e incurrió probablemente en una prohibición legal"*.

Cargo dos: *"Con su actuación el señor HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES ... al ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación alguna y sin autorización de su jefe inmediato, los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2006 y marzo 10 de 2010 y abril 30 de 2010; posiblemente infringió los artículos 23, 34 numerales 1,2 y 11, 35 numeral 1 y 7 de la Ley 734 de 2002; conducta con la cual se produjo un posible incumplimiento de sus deberes e incurrió probablemente en prohibición legal"*.

La anterior conducta fue imputada al disciplinado a título de culpa grave, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 734 de 2002. Igualmente, de acuerdo al acervo probatorio recaudado se concluyó que estaban dados los requisitos del artículo 162 de la Ley 734 de 2002 para proferir el pliego de cargos en contra del disciplinado, pues se demostraron objetivamente las faltas, comprometiendo la responsabilidad del señor Henao Morales, lo cual conlleva a la aplicación del inciso 4 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el 57 de la Ley 1474 de 2011 (Procedimiento Verbal).

Calificó la falta del disciplinado conforme los criterios establecidos por el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, para llegar a la siguiente conclusión: *"El grado de culpabilidad*

que se atribuyen a las conductas desplegadas por el señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del Código Disciplinario, se califica a título de CULPA, toda vez que era conocedor de las funciones y labores encomendadas, sin embargo, no actuó con la debida diligencia y prudencia, en virtud de no observar un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales, esto es solicitar permiso o autorización para ausentarse de su lugar de trabajo y abstenerse de asistir en estado de embriaguez”.

Analizó la ilicitud sustancial del caso a la luz del artículo 5 de la Ley 734 de 2002¹, para concluir que “las conductas de asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez y ausentarse de su lugar de trabajo, están en contravía del deber funcional que le correspondía observar, al señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES, quien realizó la conducta de manera voluntaria, y que en tales condiciones, sustrajo del deber de desempeñar a cabalidad las mismas, en atención al deber general que le asiste como funcionario público, de cumplir con la Constitución, la Ley y los Reglamentos y bajo esta órbita, garantizar el legítimo desenvolvimiento de la administración y la búsqueda de los fines del Estado”.

En la fecha 02 de noviembre de 2011, tomó posesión del cargo como defensor de oficio del disciplinado, el señor CAMILO ARANGO DUQUE, quien fue notificado en el acto del Auto Verbal 10/11 y por ende, de la fecha para recepcionar versión libre para el 9 de noviembre de 2011.

En la fecha 9 de noviembre de 2011, se constituyó el despacho en audiencia pública, no se hizo presente el implicado, el defensor se permitió aportar documento, certificado de CARISMA del 19/10/2011. Se fijó fecha para presentar alegatos de conclusión el 17 de noviembre de 2011 y fecha para proferir decisión el 24 de mismo mes y año.

El 17 de noviembre de 2011, el defensor del implicado, señor CAMILO ARANGO DUQUE, aporta por escrito sus alegatos de conclusión cuyos apartes pertinentes se transcriben:

“... Es clara la relación que existe entre ambos cargos formulados por Control Disciplinario, Hernán Augusto posiblemente se embriagó en horas de trabajo y se ausentó del trabajo por embriaguez o por las consecuencias físicas de la misma.

*No obstante la defensa aportó un certificado del Centro de atención y rehabilitación integral en salud mental de Antioquia (Carisma) mediante el cual se prueba que Hernán Augusto ingresó al centro en busca de ayuda. Allí se le diagnosticó que padecía enfermedad F 102 esto es **Transtornos mentales y del comportamiento, debido al uso del alcohol, Síndrome de dependencia**. Los transtornos mentales han sido entendidos en psiquiatría como alteraciones en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida.*

Como bien lo reconoce este despacho en el expediente, el alcoholismo ha sido considerado una enfermedad por la organización mundial de la salud, que afecta la voluntad y crea dependencia.

Por lo tanto no se puede decir que la actuación de Hernán, fue imprudente o negligente, o que no existen circunstancias que hayan determinado ese comportamiento.

En la fecha 24 de noviembre de 2011, la Oficina de Control Interno Disciplinario, profirió Decisión de Primera Instancia - Fallo Verbal 10/11, declarando probados y no desvirtuados los cargos imputados al Sr. HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES a quien impuso la sanción de Suspensión en el Ejercicio de sus Funciones por el término de un mes, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“... Las justificaciones dadas por el investigado en la versión libre, respecto a sus ausencias de los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2006... no son de recibo para este Despacho, toda vez que como Servidor Público, sabía que debía solicitar autorización a su jefe inmediato para ausentarse de su lugar de trabajo...”

En relación con el incumplimiento de la jornada laboral en marzo 10 y abril 30 de 2010, solo obra en el plenario los informes de su jefe inmediato... remitidos a esta Dirección, con los cuales no se aportó prueba de la solicitud de justificación al investigado y sus correspondientes descargos, ni tampoco se escuchó su versión sobre éstos hechos, por lo cual no es procedente imputar responsabilidad sobre los mismos...

Respecto al estado de embriaguez en su sitio de trabajo los días 29 de diciembre de 2006, 18 de diciembre de 2009 y 15 de enero de 2010, obra en el plenario los informes de los médicos de salud ocupacional de la Gobernación de Antioquia, quienes de acuerdo con los síntomas presentados por el señor HERNÁN AUGUSTO, diagnosticaron estado de embriaguez...

...considera el despacho que si bien es cierto, obra en el plenario el certificado de CARISMA, donde consta que recibió tratamiento para el manejo y control de su enfermedad F 102... también se cuenta con las investigaciones de la medicina Neuropsiquiátrica, que ha clasificado los consumidores, entre los que se encuentran los consumidores de alcohol por “rachas”, lo cual significa, que tiene periodos de abstinencia prolongados, durante los cuales conservan plena lucidez mental, y en los periodos en los que toman la decisión de iniciar el consumo de licor, tienen plenamente conservadas las capacidades de comprensión y autodeterminación.

(...)

Así mismo, se observa que en la diligencia de versión libre... el señor HERNAN AUGUSTO, aceptó que fue encontrado en estado de embriaguez en su lugar de trabajo, de lo cual se puede deducir que sus capacidades de comprensión y autodeterminación, están plenamente conservadas.

Igualmente, de acuerdo con lo informado en el certificado de la E.S.E CARISMA “el equipo clínico decidió darle de alta terapéutica al señor HERNAN AUGUSTO, por su poco compromiso con el tratamiento y desde la fecha del egreso, o se ha tenido ningún contacto institucional con el paciente”...; sin embargo se tendrá en cuenta al momento de dosificar la sanción, su interés demostrado en continuar el tratamiento con especialistas, tal como se observa en la certificación expedida por el médico de Salud Ocupacional de la Gobernación de Antioquia, donde informa que asistió a cita de Psicología el 14 de octubre de 2011 ... luego que el señor HENAO MORALES se enterara de la apertura del proceso verbal en su contra.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que el señor HENAO MORALES, al asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez y al ausentarse, sin permiso de su jefe inmediato, ni causa satisfactoria para ello, constituye falta



disciplinaria, porque con este proceder se afectó la prestación del servicio que tenía a su cargo y así mismo, se afectó el deber funcional que se comprometió a cumplir desde el momento en que se posesionó en el cargo y cuando juró cumplir con los deberes y obligaciones establecidas para su ejercicio".

Una vez proferido el fallo, el defensor de oficio se permitió interponer y sustentar el recurso de apelación, expone lo siguiente:

"Como se expresó en los alegatos u confirmó éste Despacho, existe una clara relación entre los cargos formulados, entre los hechos realizados por el señor Hernán Augusto y su enfermedad y por otro lado, no se debe esperar que el señor Hernán Augusto, hubiese pedido la autorización a su jefe para ausentarse de su lugar de trabajo, en tanto el mismo, no tenía el control sobre sus actos, por lo tanto no sabía si iba a ausentarse o no".

CONSIDERACIONES.

COMPETENCIA.

El recurso de apelación fue interpuesto uno de los sujetos procesales, quien lo sustentó dentro del término señalado en el artículo 180 del Código Disciplinario Único cumpliendo con los requisitos señalados en los artículos 110, 111, 112 y 115 ibídem.

No se observa la ocurrencia de causal de nulidad por lo que procederá a resolverse el recurso de alzada, siendo competente este despacho en virtud del artículo 76 inciso tres de la misma codificación.

De conformidad con el párrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, se revisarán únicamente los aspectos impugnados oportunamente y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

PROBLEMA JURÍDICO.

Para resolver el recurso de apelación será necesario establecer si el disciplinado actuó bajo una situación de inimputabilidad y reconocerse que actuó bajo una causal exonerativa de responsabilidad disciplinaria.

PRUEBAS Y APRECIACIÓN PROBATORIA.

Durante el proceso disciplinario se practicaron las siguientes pruebas:

- Oficio radicado No. 023107 del 17 de julio de 2007, dirigido por el doctor CRISTIAN ZULUAGA GÓMEZ, Director de Servicios Generales – Gobernación de Antioquia al Director de Control Interno Disciplinario, mediante el cual se le informa que el señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES, Trabajador Oficial de oficios varios, incurrió en presuntas irregularidades en los días: 27 de diciembre de 2006 (se presentó a laborar a las 9:00 a.m y en las horas de la tarde se ausentó del trabajo a las 2:30 p.m, regresando a las 5:00 p.m), el día 28 de diciembre de 2006 (se presentó a laborar a las 8:30 p.m, luego a las 10:00 a.m se retiró a cobrar quincena y regresó a las 2:30 p.m), el 29 de diciembre de 2006 (laborando normalmente hasta las 9:30 a.m, ausentándose del lugar de

trabajo sin autorización y regresando a las 11:30 a.m en estado de embriaguez),

- Diagnóstico por embriaguez aguda expedido el 29 de diciembre de 2006, por el médico de Salud Ocupacional de la Gobernación de Antioquia.
- Certificación laboral del señor Hernán Augusto Henao Morales expedida el 15 de febrero de 2007, donde se informa que presta sus servicios al Departamento de Antioquia desde el 26/08/1990.
- Oficio radicado No. 361537 del 22 de diciembre de 2009, remitido por la doctora MARÍA EUGENIA CARMONA ESPINOSA, Directora de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, a la Dirección de Control Interno Disciplinario, informando una presunta irregularidad del servidor público HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES, basada en el hecho ocurrido el 18 de diciembre de 2009, cuando éste se encontraba en su puesto de trabajo bajo estado de alicoramiento, hecho a raíz del cual se elevó un acta suscrita por los señores JOSE JULIÁN ARANGO MEDINA (Médico del área de Salud Ocupacional), PAULA DUQUE JARAMILLO (Médico del área de Salud Ocupacional), ELKIN MORENO MUÑETÓN (Técnico Operativo – Desarrollo Humano), MARTHA ELENA BEDOYA VALENCIA (Directora Administrativa de Servicios Generales) y NICOLÁS MONTOYA CALLE (Técnico – Jefe Área de Servicios Generales), mediante la cual se da fe que fue encontrado el señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES, *"dormido sobre una mesa en su puesto de trabajo... al levantarse de la mesa, se observa problemas para la marcha, aliento alcorado y dificultad para la expresión verbal..."*.
- Informe de fecha 18 de diciembre de 2009, suscrito por los funcionarios JOSE JULIAN ARANGO MEDINA (Médico del área de Salud Ocupacional), PAULA DUQUE JARAMILLO (Médico del Área de Salud Ocupacional), ELKIN MORENO MUÑETÓN (Técnico Operativo – Desarrollo Humano), MARTHA HELENA BEDOYA VALENCIA (Directora Administrativa de Servicios Generales) y NICOLÁS MONTOYA CALLE (Técnico – Jefe área de Servicios Generales), el cual constituye una valoración del estado de alicoramiento en el cual se encontraba el señor Hernán Augusto Henao Morales.
- Informe del 15 de enero de 2010, por medio del cual el Técnico Operativo señor NICOLÁS ANTONIO MONTOYA CALLE, y el Médico del área de Salud Ocupacional doctor JOSE JULIAN ARANGO MEDINA, manifiestan renuencia de parte de señor HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES para ser evaluado, a simple vista diagnostican clínicamente estado de embriaguez positivo.
- Oficio radicado No. 008123 del 18 de enero de 2010, remitido por la doctora MARÍA EUGENIA CARMONA ESPINOSA, Directora de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, a la Dirección de Control Interno Disciplinario, informando una nueva presunta irregularidad del servidor público HERNAN AUGUSTO HENAO MORALES, consistente en hechos ocurridos el 15 de enero de 2010, reiteradamente por encontrarse bajo estado de alicoramiento en su sitio de trabajo, evento en el cual intervino el doctor JOSE JULIAN ARANGO MEDINA, Médico del área de salud Ocupacional, quien verificó el estado de embriaguez., observando al paciente *"...con dificultad para la marcha, aliento alcohólico..."*.
- Comunicación Auto de Pruebas radicado No. 022141 del 3 de febrero de 2010.
- Certificación expedida por CARISMA, en la cual se informa que el señor Hernán

Augusto Henao Morales, realizó tratamiento en dicha institución para el manejo y control de la enfermedad F – 102 (Transtornos mentales y del comportamiento, debido al uso del alcohol: Síndrome de dependencia). En dicho informe precisan además que se decidió dar de alta terapéutica por su poco compromiso con el tratamiento.

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DE LOS SUJETOS PROCESALES.

En su apelación, la defensa argumenta que *“existe una clara relación entre los cargos formulados, entre los hechos realizados por el señor Hernán Augusto y su enfermedad y por otro lado, no se debe esperar que el señor Hernán Augusto, hubiese pedido la autorización a su jefe para ausentarse de su lugar de trabajo, en tanto él mismo, no tenía el control sobre sus actos, por lo tanto no sabía si iba a ausentarse o no”*.

En el mismo sentido, al momento de descorrer los alegatos de conclusión, la defensa arguyó *“... no se puede sancionar a una persona por la consecuencia de sus trastornos mentales causados por el alcoholismo”, “Los trastornos mentales han sido entendidos en psiquiatría como alteraciones en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida”,* nos está enmarcando en la órbita de la inimputabilidad como causal excluyente de la responsabilidad.

La inimputabilidad está consagrada en el artículo numeral 7 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 como causal excluyente de la responsabilidad disciplinaria, disponiendo además que *“en tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes”*.

El Código Disciplinario Único no consagra el concepto de inimputabilidad, como si lo hace el Código Penal en su artículo 33, disponiendo que *“es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”*.

La falta de comprensión de la ilicitud de la conducta debe entenderse en materia disciplinaria en los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que define la ilicitud sustancial al decir que *“la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”*.

Por esto la doctrina nacional ha dicho que *“el inimputable, por no tener capacidad de aprehender el deber y como tal aptitud de motivación conforme al mismo, no puede ser sujeto del derecho disciplinario”*². Puede afirmarse entonces, que en materia disciplinaria será inimputable el servidor público que no puede comprender que con su conducta afecta el deber funcional.

Si bien es cierto que se cuenta con una certificación de CARISMA, en la cual se informa que el señor Hernán Augusto Henao Morales, realizó tratamiento en dicha institución para el manejo y control de la enfermedad F – 102 (Transtornos mentales y del comportamiento, debido al uso del alcohol: Síndrome de dependencia), en el mismo se indicó que la institución decidió dar de alta terapéutica al paciente por su poco compromiso con el tratamiento. Esto conlleva a concluir que, en los períodos de abstinencia y lucidez mental, el disciplinado tenía plenamente conservadas sus capacidades de autodeterminación y de comprensión que la cura a su enfermedad no estaba predeterminada a ninguna circunstancia

ajena a su propia voluntad.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el procesado estaba sufriendo un trastorno mental durante todos los mismos días en que se ausentó del trabajo, debe tenerse en cuenta que para el reconocimiento de la inimputabilidad por causa de dicho trastorno es necesario que el hecho ilícito haya ocurrido como consecuencia directa del mismo, tal como explica la siquiatria forense:

"También es claro que el trastorno mental provocado por el consumo de alcohol o de otras sustancias y dirigido a la comisión de un delito no suprime la culpabilidad, porque en esa situación el que es causa de la causa es causa de lo causado (causa causae est causa causati). Esto es, el hecho de que sobrevenga un trastorno es causado previamente por la persona responsable

Por esto el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 estipula que *"no habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento"*.

Es que el conocimiento previo del horario laboral aunado a lo afirmado en versión libre del 18 de noviembre de 2009, dan cuenta de que en horario laboral se ausentó por asuntos de "índole personal", presentándose en dichos interregnos los alicoramientos que son motivo de reproche disciplinario. Habiendo quedado probado que el ausentismo se presentó sin mediar permiso alguno, constituye esto, un abandono laboral injustificado, conciente y voluntario, puesto que el implicado estuvo informado a cerca de la obligatoriedad del cumplimiento de los horarios laborales y los incumplió sin motivo justificado.

Es por esto que no hay lugar al reconocimiento de la situación de inimputabilidad que solicita la defensa, y en este sentido se resuelve el problema jurídico formulado en el cual gira esta controversia.

Valga anotar finalmente que según certificación emanada de la institución CARISMA, se intentó la rehabilitación y el tratamiento para la enfermedad que padecía el señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES, el cual no pudo realizarse por la falta de compromiso y colaboración del disciplinado.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

Tipicidad de la conducta.

En el fallo de primera instancia se adecuó la conducta del señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES como una falta grave a título de culpa conforme al artículo 50 de la Ley 734 de 2002, que consagra como tal *"el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones..."*.

Y ya que se trata de una infracción contemplada en el Código Disciplinario Único y no está demostrada ninguna causal de exclusión de responsabilidad, puede afirmarse con toda certeza que se trata de una falta disciplinaria a la luz del artículo 23 del Código Disciplinario Único.

Vistos los hechos por los cuales se adelantó el proceso, y que fueron probados en su transcurso, encuentra el despacho que la conducta se adecua típicamente a dicha descripción legal, ya que el servidor investigado se encontró en estado de embriaguez en su sitio de trabajo los días 29 de diciembre de 2006, 18 de diciembre de 2009 y 15 de enero de 2010, y los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2006, por

ausentarse de su lugar de trabajo sin justificación alguna sin autorización de su jefe inmediato.

No encuentra este despacho motivos para modificar la tipificación de la conducta hecha en primera instancia.

Ilícitud sustancial.

No encuentra esta instancia motivos para modificar lo dicho en primera instancia sobre la ilicitud sustancial de la conducta del disciplinable, puesto que dada su calidad de trabajador oficial – oficios varios -, se presentó una perturbación el servicio, pues como se manifestó el en fallo verbal de primera instancia *“el déficit del recurso humano en la Gobernación de Antioquia, para prestar el servicio de oficios varios, constituye sin duda, una perturbación del servicio en alto grado. Igualmente se perturba el servicio en mayor grado, cuando el funcionario es encontrado en su lugar de trabajo en estado de embriaguez, pues en estas condiciones, puede ocasionar graves daños a su integridad física y la consecuente perturbación del orden interno en la entidad”*.

En efecto, encuentra este despacho que la conducta del disciplinado es ilícita sustancialmente, y por lo tanto, antijurídica, en los términos del artículo 5 del Código Disciplinario Único, más arriba citado.

Culpabilidad.

En su escrito de apelación la defensa alegó que el procesado no podía ser culpable de la falta disciplinaria que se le imputa puesto que le era imposible conocer la ilicitud de la infracción y actuar voluntariamente por considerarlo inimputable. Dichos argumentos no fueron acogidos por el despacho tal como se expuso.

Por lo tanto, el señor HENAO MORALES si podía haber actuado culpablemente.

Sobre la forma de culpabilidad del disciplinado, la Dirección de Control Interno de la Gobernación de Antioquia la calificó en primera instancia como culposa, puesto que el señor HENAO MORALES era conocedor de sus funciones, labores, obligaciones y horario, así como de los días de trabajo, y por lo tanto conocedor de las consecuencias que podrían acarrear el ausentismo laboral sin previo permiso y el acudir en estado de embriaguez a su lugar de trabajo.

Criterios de gravedad o levedad de la falta.

La falta disciplinaria por la cual se sanciona al señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES está contemplada en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002 como falta grave.

Punibilidad.

El señor HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES incurrió, a título de culpa, en la falta grave contemplada en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 44 de la misma codificación, la comisión de las faltas disciplinarias graves a título culposo, como en este caso, debe dar lugar a la imposición de la sanción de **SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO**, dentro de los límites establecidos por el artículo 46 ibídem que no podrá

seri inferior a un mes ni superior a doce meses.

Para la determinación de la sanción deben tenerse en cuenta los criterios establecidos en el artículo 43 de la citada ley. En el fallo impugnado se analizaron cada uno de los criterios allí establecidos teniendo en cuenta circunstancias favorables al disciplinado, dando lugar a la imposición de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por un mes.

El término de la sanción no podrá ser rebajado por ser el mínimo imponible según la ley para las faltas disciplinarias culposas, ni aumentada en virtud de la prohibición de reforma en peor de que trata el artículo 116 de la Ley 734 de 2002.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobernador del Departamento de Antioquia,

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR el Fallo Verbal 10/11 del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011), dictado en audiencia de procedimiento verbal por la Dirección de Control Disciplinario Interno de la Gobernación de Antioquia bajo el radicado 1337/2007 mediante el cual se le impuso al disciplinado la sanción de **SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR UN (1) MES** al señor **HERNÁN AUGUSTO HENAO MORALES** identificado con la C. C. 71.001.350, en su calidad de Trabajador Oficial – Oficios Varios – Secretaría General-, por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Devolver las diligencias a la oficina de origen para la notificación a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

Para tal efecto, librese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

ARTÍCULO TERCERO. En firme esta decisión, la oficina de origen diligenciará y remitirá los formularios pertinentes para el registro de la sanción disciplinaria, y remitirá copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Gobernador de Antioquia

RESOLUCIÓN NÚMERO **047940** DE 2011

(02 DIC 2011)

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los Decretos 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996 y 1396 de 1997 y,

CONSIDERANDO:

Que la entidad denominada “**FUNDACIÓN EDUCATIVA POLIVIRTUAL**”, con domicilio en el Municipio de Medellín, mediante oficio N° 201100135323 del 13 de septiembre del de 2011, solicita a este Despacho por intermedio de la señora **CLARA LIA GUTIERREZ ESCOBAR**, Representante Legal de la entidad, con cédula de ciudadanía N° 43.752.239, se le apruebe la reforma a los estatutos de la entidad.

Que una vez estudiada por el Secretario de Educación para la Cultura de Antioquia, la documentación aportada por la entidad, conceptúa mediante oficio N° 201100064733 del 25 de noviembre de 2011, que la misma reúne los requisitos formales de que hablan los artículos 28, 29, 30 y 31 del Decreto 525 de 1990.

Por lo anteriormente señalado,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la reforma introducida a los Estatutos de la entidad denominada “**FUNDACIÓN EDUCATIVA POLIVIRTUAL**”, con Personería Jurídica otorgada mediante Resolución N° 0100265 del 15 de julio de 2010, proferida por el Gobernador de Antioquia, con domicilio en el municipio de Medellín.

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribase en el libro respectivo el nombre de la señora **CLARA LIA GUTIERREZ ESCOBAR**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.765.702, como Representante Legal en calidad de Directora.

Anéxese al expediente la documentación correspondiente a la ratificación de la doctora **CAROLINA GONZALEZ OSORIO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.974.216 y con Tarjeta Profesional N° 136920-T, como Revisora Fiscal de la entidad.

Lo anterior, de conformidad con el Acta N° AS2011 – 002 del 22 de agosto de 2011, de la Asamblea General, la cual se anexa.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución, procede el Recurso de Reposición ante el mismo funcionario emisor del acto, el cual debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Departamental, a costa de los interesados, cumplido éste requisito surte sus efectos legales.

Dada en Medellín, a los 02 DIC 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Gobernador de Antioquia 

RESOLUCIÓN N° 047543

02 DIC 2011

Por la cual se autoriza el pago de la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias.

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3 de la Ley 10 de 1990 y 159 de la Ley 100 de 1993, el Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del Territorio Nacional la atención inicial de urgencias y la atención de urgencias, entendidas en los términos del Decreto 412 de 1992 y de la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social.
2. Que en desarrollo del Decreto 412 de 1992 expedido por el Presidente de la República, el cual reglamentó parcialmente los servicios de urgencias, corresponde a las Direcciones Seccionales de Salud, pagar los servicios de atención inicial de urgencias y de atención de urgencias de segundo y tercer nivel, a las personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando la atención haya sido prestada en instituciones privadas con las que la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia no tenga contrato o cuando la residencia habitual de la persona que haya recibido la atención no coincida con la jurisdicción de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia donde se localiza la institución pública o privada que haya prestado la atención; para lo cual deberá apropiar los recursos que sean necesarios.
3. Que el Artículo 67 de la Ley 715 de 2001, establece que la "Atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios prestados no se requiere contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se efectuará mediante resolución motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y deberá cancelarse máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la factura de cobro".
4. Que en observancia al artículo 10 del Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, incluyó en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el rubro de Urgencias para

cubrir la Atención Inicial de Urgencias y la Atención de Urgencias en aquellos pacientes que son de nuestra competencia.

5. Que **LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA**, presentó facturación por valor de \$115.908.800, por servicios de salud prestados a la población inimputable del departamento de Antioquia, durante el mes de octubre de 2011 y la interventora asignada de la Dirección de Atención a las Personas autorizó un pago de \$115.908.800, según Acta de Pago N°11-2011 del 22 de noviembre de 2011.

En mérito de lo expuesto, este despacho

047943

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR conforme al Manual Tarifario expedido por el Ministerio de la Protección Social, reglamentado mediante el Decreto N°2423 del 31 de diciembre de 1998 y con cargo a los rubros A.52.4.7/1116/6-3152/120208000/011704 denominado PROGRAMAS INIMPUTABLES DE LA NACIÓN Programa inimputables, la cancelación de los servicios de Atención Inicial de Urgencias y Atención de Urgencias prestados a la población inimputable del departamento de Antioquia, durante el mes de octubre de 2011, por **LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA**, por un valor de **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.L (\$115.908.800)**.

ARTÍCULO SEGUNDO. Exigir para la cancelación de los servicios, la presentación por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de la respectiva cuenta de cobro y el acta de pago expedida por la Dirección de Atención a las Personas de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde conste que los servicios prestados se ajustan a los términos de la presente Resolución.

Comuníquese y Cúmplase.

Dada en Medellín a los 02 DIC 2011



CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Resolución N° **047960**

(02 DIC 2011)

Por medio de la cual se resuelve un derecho de petición

El Secretario de Educación de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y Constitucionales, y

CONSIDERANDO

Que El doctor **JOSE ANTONIO QUEJADA VELEZ**, con T.P No. 119.738 del C.S de la Judicatura, en representación de la Fundación Educativa Alegría de Aprender mediante petición radicada con fecha del 22 de noviembre de 2011, pone en conocimiento de este Despacho los siguientes hechos:

1. Que mediante auto interlocutorio No. 127 del 3 de marzo de 2011, el Juzgado Administrativo del Circuito de Turbo, resolvió las agencias en derecho del proceso radicado 20008-00222, estableciendo un porcentaje correspondiente al 5% del valor total del crédito contenido en la sentencia.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se estableció el monto de dichas costas en la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLV (\$42.550.832)**.
3. Que mediante auto de sustanciación No. 808 del 4 de octubre de 2011, se le reconoció Personería Jurídica para representar a la Fundación Alegría de Aprender y se le expidió copia del auto 127 que presta mérito ejecutivo.
4. Que de acuerdo a los preceptos contenidos en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, solicita al Gobernador de Antioquia se sirva ordenar el pago de los dineros reconocidos mediante providencia judicial, por concepto de costas y agencias en derecho la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLV (\$42.550.832)**, y los intereses comerciales y moratorios considerados a la fecha de ejecutoria del respectivo auto, es decir el 7 de marzo de 2011.

Que teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el solicitante en su memorial, procede el Despacho a decidir sobre el asunto:

En efecto tal y como lo señala el Doctor **QUEJADA VELEZ**, el Juzgado Administrativo de Turbo, mediante auto interlocutorio No. 127 del 23 de marzo de 2011, resolvió modificar las agencias en derecho establecida en el artículo 2 del auto 889 del 16 de noviembre de 2010, y en su lugar establecer por ese concepto, un porcentaje del 5% del valor total del crédito, imponiendo como monto total de las costas la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MLV (\$42.550.832)**.

De otro lado y en el asunto que nos ocupa, mediante providencia del cinco (5) de abril de dos mil once (2011), radicada bajo el No. **05-001-31-005-2011-347-00** el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, resolvió **LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO**, a favor de la doctora **CIELO BEATRIZ GARAY POLO** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 34.961.108 y en contra de la **FUNDACION ALEGRIA DE APRENDER**, entidad sin ánimo de lucro, por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000)**, por

concepto de honorarios profesionales, intereses legales por los honorarios profesionales dejados de cancelar desde la fecha de ejecutoria de la decisión de Segunda Instancia, proveniente de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Para conocimiento de lo anterior, la doctora **CIELO BEATRIZ GARAY POLO** por medio de escrito radicado No. 201100057178 del 25 del 2011/04/25, solicita al señor Secretario de Educación de Antioquia, se sirva **SUSPENDER el trámite de pago de las agencias en derecho** ordenadas por el Juzgado Administrativo de Turbo con base en la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito.

De igual manera, mediante oficio No. **702 del 16 de junio de 2011**, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín comunica a la Tesorería del Departamento de Antioquia, que **los dineros adeudados por la Gobernación de Antioquia por concepto de costas y agencias en derecho del proceso adelantado en el Juzgado Administrativo de Turbo Antioquia**, conocido con el No. de radicado 05837333100120081 promovido por la Fundación Alegría de Aprender contra la Gobernación de Antioquia, **se pongan a disposición de esa Agencia Judicial**; con la finalidad de efectivizar el cumplimiento de la obligación por parte de la ejecutada. Los dineros fruto de embargo deberán ser depositados en la cuenta No. **050012032005 del Banco Agrario de Colombia**.

Dando cumplimiento entonces a lo ordenado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, es que la Secretaría de Educación de Antioquia, mediante **orden de pago No. 05831 del 18 de julio de 2011**, ordena consignar en la cuenta No. **No. 050012032005 del Banco Agrario de Colombia**, la suma de **\$42.550.832**, cuyo importe fue realizado a través del documento No. 3000085062 del 21/07/2011.

Así las cosas, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, frente a las costas y agencias en derecho impuestas por el Juzgado Administrativo de Turbo mediante auto interlocutorio No. 127 del 23 de marzo de 2011, y en consecuencia no es posible acceder a la petición del doctor **JOSE ANTONIO QUEJADA VELEZ**.

En merito de lo expuesto, el Secretario de Educación de Antioquia,

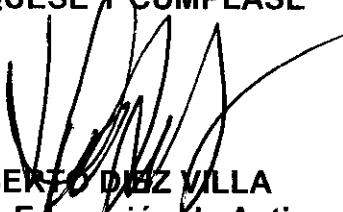
RESUELVE

PRIMERO: NO ACCEDER A LA PETICION del doctor **JOSE ANTONIO QUEJADA VELEZ**, con T.P No. 119.738 del C.S de la Judicatura, en representación de la Fundación Educativa Alegría de Aprender, contenida en el escrito con fecha del 22 de noviembre de 2011, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión al interesado, advirtiéndolo que contra la misma procede el recurso de Reposición que deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este proveído.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUMBERTO DIEZ VILLA
Secretario de Educación de Antioquia

RESOLUCIÓN Número 048008

(02 DIC 2011)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO"

**LA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional No. 2474 del 7 de julio de 2008, artículo 77 y los Decretos Departamentales No. 0926 y 1016 de abril 8 y 14 de 2008, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Departamento de Antioquia con base en lo previsto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2°, numeral 4°, prevé dentro de las modalidades de selección, LA CONTRATACIÓN DIRECTA.
2. Que el Decreto 2474 de 2008, en su artículo 77, prevé la obligatoriedad de proferir un ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, siendo de obligatorio cumplimiento en contratos Interadministrativos salvo excepciones expresas.
3. La causal que se invoca para la celebración de este contrato es la señalada en el artículo 2°, numeral 4°, literal C, de la Ley 1150 de 2007.
4. Que el objeto del contrato es "Realizar el montaje, promoción, producción y emisión de los encuentros de concertación institucional y ciudadana desarrollados en los diferentes municipios del Departamento".



5. Que para el convenio, el Departamento de Antioquia – Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social se cuenta con CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$177.062.400) del CDP NRO. 3500021967 Rubro Presupuestal A.13.3/1119/0-1010/110204000/071026 Fondos Comunes “Encuentros de Concertación Institucional Ciudadana”.
6. Que se ha elaborado el pertinente análisis de estudio y documentos previos, dada la modalidad de la selección (Contratación Directa), el que se puede consultar con los documentos que hacen parte del contrato, en la Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Social, oficina 1004 del Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra).
7. Que de acuerdo con lo anterior, se establece la necesidad de contratar directamente mediante convenio interadministrativo con e **TELEANTIOQUIA**.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE: 048008

ARTICULO ÚNICO: Ordenar bajo la modalidad de la Contratación Directa, la celebración del convenio Interadministrativo con **TELEANTIOQUIA**, cuyo objeto es “Realizar el montaje, promoción, producción y emisión de los encuentros de concertación institucional y ciudadana desarrollados en los diferentes municipios del Departamento”. El convenio interadministrativo tiene un valor de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L (\$177.062.400)**.

Dada en Medellín, a los 02 DIC 2011

CÚMPLASE,


HENRY AUGUSTO GIRALDO MUÑOZ
Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Número 048009

(02 DIC 2011)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”

LA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional No. 2474 del 7 de julio de 2008, artículo 77 y los Decretos Departamentales 1016 del 14 de abril de 2008 y 1281 del 14 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

1. Que el Departamento de Antioquia con base en lo previsto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2°, numeral 4°, prevé dentro de las modalidades de selección, LA CONTRATACIÓN DIRECTA.
2. Que el Decreto 2474 de 2008, en su artículo 77, prevé la obligatoriedad de proferir un ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, siendo de obligatorio cumplimiento en Contratos Interadministrativos salvo excepciones expresas.
3. La causal que se invoca para la celebración de este Contrato es la señalada en el artículo 2°, numeral 4°, literal C, de la Ley 1150 de 2007.
4. Que el objeto del Contrato es "Apoyo logístico para la realización del encuentro de alcaldes en el municipio de Guatapé".
5. Que para el Contrato, por el Departamento de Antioquia – Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social se cuenta con la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000), según disponibilidad presupuestal N° 3500021971 del 2 diciembre de 2011 expedido por el Secretario de Hacienda
6. Que se ha elaborado el pertinente análisis de estudios y documentos previos, dada la modalidad de la selección (Contratación Directa), el que se puede consultar con los documentos que hacen parte del Contrato, en la Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Social, oficina 1004 del Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra).
7. Que de acuerdo con lo anterior, se establece la necesidad de contratar directamente mediante Contrato Interadministrativo con el Parque Tecnológico de Antioquia S.A

En merito de lo expuesto,


RESUELVE: 048009

ARTICULO ÚNICO: Ordenar bajo la modalidad de la Contratación Directa, la celebración del Contrato Interadministrativo con el Parque Tecnológico de Antioquia S.A cuyo objeto es: "Apoyo logístico para la realización del encuentro de alcaldes en el municipio de Guatapé".

El Contrato Interadministrativo tiene un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)

Dada en Medellín, a los 02 DIC 2011

CUMPLASE,


HENRY AUGUSTO GIRALDO MUÑOZ

Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social

RESOLUCIÓN No. 048014

05 DIC 2011

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 04 de Agosto de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Matecaña**, ubicada en la Carrera 74 No.91-20 del Municipio de Medellín, Antioquia, cuyo Propietario es el señor **Carlos Albeiro Parra Vanegas**, identificado con cédula de ciudadanía N°71.691.644 y su **Director Responsable**, el señor **Luis Dario Valencia Bedoya**, titular de la cédula de ciudadanía N°8.350.704, y con Credencial de Expendedor de Drogas inscrito en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el No.2714.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N°06158 de Junio 1º de 2011, se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N°08728 de Agosto 03 de 2011 contra los señores **Carlos Albeiro Parra Vanegas y Luis Dario Valencia Bedoya** en sus calidades de **Propietario y Director Responsable**, en su orden respectivo, de la **Droguería Matecaña** del Municipio de Medellín, por infringir el cumplimiento de los artículos 13, 72 literales b), d) y e), y parágrafos 1 y 2 del artículo 77 del Decreto 677 de 1995; artículo 20 numeral 5º del Decreto 2200 de 2005; artículos 16 y 54 literales d) y e) del Decreto 4725 de 2005; artículo 5 numeral 1 literal e) del Decreto 2330 de 2006; literal b) numeral 3 del artículo 8 de la Resolución 1403 de 2007; artículo 3 de la Resolución 2335 de 2009 modificado por el artículo 3 de la Resolución 3962 del mismo año; literales d) y f) del numeral 1.1. Capítulo II, Título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante Resolución 1403 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los citados señores, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su

derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas 14 productos equivalentes a **243 UNIDADES de MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIFERENTES**, tales como:

Medicamentos Prohibidos (vencidos, de uso exclusivo de entidades de seguridad social y medicamentos con pseudoefedrina).

Medicamentos Fraudulentos (con las etiquetas enmendadas, Introducidos al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales; sin registro sanitario del INVIMA).

Medicamentos Alterados (con el sistema de seguridad en la tapa alterado, tabletería suelta)

Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques (sin el nombre del laboratorio fabricante y su ubicación, y sin fecha de vencimiento ni número de lote, sin información).

Todos estos productos fueron **decomisados** como **medida sanitaria de seguridad**, y se dejaron copias de las actas levantadas con ocasión de las visitas.

Procesos y Procedimientos (no se encuentran documentados ni implementados)

Servicio de Inyectología (carece de elementos necesarios para prestar el servicio; no cuenta con normas sobre limpieza y desinfección de áreas)

Condiciones higiénico locativas (las instalaciones eléctricas son inadecuadas, sin canalizar; no cuenta con suficientes estanterías).

Prestación de servicios, ejecución de actividades y tenencia de productos no permitidos en este tipo de establecimiento (Se evidenció la recomendación de medicamentos).

Al respecto, los párrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA o VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que MEDICAMENTO "es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado".

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le dé un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que éste mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdican mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la **Droguería Matecaña**, del Municipio de Medellín.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste son fraudulentos, estando prohibida su tenencia. **Artículo 2° y 77 parágrafo 2° del Decreto 677 de 1995.**

Con respecto a los medicamentos sin el nombre del laboratorio fabricante y su ubicación, y sin número de lote, se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2° del Decreto 677 de 1995, que define que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que "...Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado", de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2° del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque

secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

ANÁLISIS DE CULPABILIDAD: 048014

05 DIC 2011

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizadas al establecimiento, se le atribuye a los investigados, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos farmacéuticos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil:

"La ley distingue tres especies de culpa y descuido:

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".

ESCALA DE SANCIONES:

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
- c) Decomiso.
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.

Tener Productos Farmacéutico Prohibidos, Alterados, Fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, **SIN IMPORTAR LA CANTIDAD QUE SEA**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas

están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Así mismo los significativos hallazgos denotan su desacato a la normatividad sanitaria vigente y constituyen lo que en derecho se denomina **FLAGRANCIA**; además la prueba física existente, compone la evidencia no controvertida y menos desvirtuada de que cuando se practicó la visita por parte de los funcionarios de esta Secretaría, efectivamente se detectaron las anomalías que tipifican las infracciones que se le imputaron a los involucrados.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietario y Director Responsable**, les es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, al por mayor o al menudeo, de medicamentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

En cuanto al producto con lote y fecha de vencimiento ilegibles, no es de recibo que pretenda endilgarse la responsabilidad a los distribuidores y proveedores, toda vez que como **Propietario y Director Responsable** les concierne constatar la calidad de lo que adquieren para comercializar dentro del establecimiento, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad comercial que desarrollan, en la cual está comprometida la salud individual y colectiva de la comunidad usuaria de la droguería.

Manifiestan los implicados que han dado cumplimiento a todos los requerimientos dejados en la visita, pero es de advertir que el cumplimiento de los mismos no los eximen de su responsabilidad administrativa, pero les será tenido en cuenta al momento de imponer la sanción.

Además que mediante resolución N°6359 del 26 de marzo de 2009, el señor Carlos Albeiro Parra Vanegas, en su condición de propietario fue sancionado, hecho que resulta relevante para este despacho al momento de imponer la sanción, toda vez, que muestra renuencia al cumplimiento de la normatividad sanitaria.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fe y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería Matecaña**

del municipio de Medellín, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Carlos Albeiro Parra Vanegas**, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.691.644 en su calidad de **Propietario** de la **Droguería Matecaña** ubicada en la Carrera 74 No.91-20 del Municipio de Medellín, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30), SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento del fallo, y al señor **Luis Darío Valencia Bedoya**, identificado con cédula de ciudadanía No.8.350.704, en su calidad de **Director Responsable** con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, al momento del fallo, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las implicadas, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Las sancionadas deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 05 DIC 2011

ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de

RESOLUCIÓN N° 048015

05 DIC 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, la Resolución 23483 de 2009 expedida por el señor Gobernador de Antioquia y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, corresponde a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 10 de Junio de 2010 , funcionarios adscritos a esta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Drogueria San Crispin**, ubicada en la calle 50 No.51-16 del Municipio de Segovia, Antioquia, cuya **Propietaria, Administradora y Directora Responsable** es la señora **Luz Gladys Arango de Osorio**, identificada con cédula de ciudadanía No.22.087.057, y con Credencial de Expendedora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia con el No. 1035.

Que mediante Auto No.08445 del 30 de Junio de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 08724 del 03 de Agosto de 2011 se le formuló cargos a la señora **Luz Gladys Arango de Osorio** en su calidad de **Propietaria, Administradora y Directora Responsable** de la **Drogueria San Crispin**, del Municipio de Segovia, por infringir el cumplimiento de los artículos 13 y 72 literales d) y e) y Parágrafo 1 del artículo 77 del Decreto 677 de 1995; artículo 69 del Decreto 1950 de 1964, inciso primero, y literal b) del numeral 1.1., Capítulo II y literal d) numeral 2.2. Capítulo V, título I del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante Resolución 1403 de 2007.

Que la señora **Luz Gladys Arango de Osorio**, se notificó personalmente del auto de cargos, y haciendo uso del traslado, dentro del término legal presentó escrito de descargos con Radicado No.201100129042 del 02-09-2011, pero que según consta en dicho escrito, éste fue recibido en esta dependencia vía fax, el día 29 -08-2011.

Por tal motivo al momento de proferir este fallo se han tenido en cuenta las argumentaciones allí expuestas, como se verá más adelante.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas 10 productos equivalentes a 63 **UNIDADES de MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIFERENTES**, tales como:

Medicamentos Prohibidos (vencidos).

Medicamentos Fraudulentos (sin registro sanitario del INVIMA, con la etiqueta enmendada).

Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques (sin fecha de vencimiento ni número de lote).

Todos estos productos fueron **decomisados** como **medida sanitaria de seguridad**, y se dejaron copias de las actas levantadas con ocasión de las visitas.

Al respecto, los párrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*“PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades publicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*“PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS O ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos”.*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° párrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** “*es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnostico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado*”.

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le dé un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdicen mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la **Droguería San Crispin**, del Municipio de Segovia, Antioquia.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste son fraudulentos, estando prohibida su tenencia. **Artículo 2º y 77 parágrafo 2º del Decreto 677 de 1995.**

Con respecto a los medicamentos sin fecha de vencimiento ni número de lote, se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2º del Decreto 677 de 1995, que define que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que “....Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado”, de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***“implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen”***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que ***“toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad”***.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la ***“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados....”*** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron,

entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *“la prevalencia del interés general”, y “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación...”*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

*“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. **Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios**”* (Negrilla fuera de texto).

ANÁLISIS DE CULPABILIDAD:

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizadas al establecimiento, se le atribuye a los investigados, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos farmacéuticos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil:

“La ley distingue tres especies de culpa y descuido:

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

ESCALA DE SANCIONES:**048015**

05 UIC 2011

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Tener Productos Farmacéutico Prohibidos, Fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, **SIN IMPORTAR LA CANTIDAD QUE SEA**, presentar humedad en las paredes, el establecimiento desorganizado en el segundo piso y con elementos ajenos a su funcionamiento, y no ser el establecimiento totalmente independiente, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Así mismo los significativos hallazgos denotan su desacato a la normatividad sanitaria vigente y constituyen lo que en derecho se denomina **FLAGRANCIA**; además la prueba física existente, compone la evidencia no controvertida y menos desvirtuada de que cuando se practicó la visita por parte de los funcionarios de ésta Secretaría, efectivamente se detectaron las anomalías que tipifican las infracciones que se le imputaron a los involucrados.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fe y el bienestar colectivo.

Se tendrán como factores atenuantes el no tener la implicada antecedentes de este tipo, y además el acatamiento a las normas y correctivos tomados y relacionados en los descargos, advirtiéndole que el hecho de manifestar que no tiene donde almacenar los elementos ajenos a la droguería, no la exime de la falta, y que deberá tomar medidas para evitar seguir incurriendo en la misma.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **San Crispin** del



Municipio de Segovia, Antioquia, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Luz Gladys Arango de Osorio** identificada con cédula de ciudadanía N° 22.087.057 en su calidad de **Propietaria, Administradora y Directora responsable** de la **Droguería San Crispin**, ubicada en la Calle 50 No.51-16 del Municipio de Segovia, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **VEINTE (20) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, al momento del fallo, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las implicadas, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La sancionada deberá asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 05 DIC 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo

Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 048016

05 DIC 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, la Resolución 23483 de 2009 expedida por el señor Gobernador de Antioquia y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, corresponde a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 19 de Enero de 2010 se recibe en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia queja en la cual se informa que la Droguería Sol y Vida no cumple con ninguna norma para funcionar.

Que en atención a esta queja el día 29 de Abril de 2010, funcionarios adscritos a esta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Sol y Vida**, ubicada en la carrera 31 No.107-19 del Municipio de Medellín, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Anirley Chaves Baloyer**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.038.797.827, su **Directora Responsable** la señora **Sonny Rentería Romaña**, identificada con cédula de ciudadanía No.32.289.468 y con Credencial de Expendidora de Drogas inscrita en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia con el No. 2905

Que mediante Auto No.06022 del 12 de Mayo de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 08536 del 18 de Julio de 2011 se le formularon cargos a las señoras **Anirley Chaves Baloyer** en su calidad de **Propietaria** y a la señora **Sonny Rentería Romaña**, como **Directora Responsable** de la **Droguería Sol y Vida**, por infringir el artículo 73 del Decreto 1950 de 1964; artículos 13 y 72 literales b),d) y e), y párrafos 1 y 2 del artículo 77 del Decreto 677 de 1995; artículo 11 párrafo 3 y artículo 12 del Decreto 2200 de 2005; artículo 5 numeral 1 literales a) y d), y numeral 3º del Decreto 2330 de 2006; Literal b) numeral 3 del artículo 8 de la Resolución 1403 de 2007; inciso 1º del numeral 1.1., Capítulo II inciso final numeral 2.1. y literal d) numeral 2.2. Capítulo V Título I, literal j numeral 3.2. y numeral 3.3.literal f) capítulo II, título II del Manual de condiciones esenciales y procedimientos del Servicios Farmacéutico, adoptado mediante Resolución 1403 de 2007, infracciones evidenciadas en la visita del 29 de Abril de 2010

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos a las implicadas, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fueron notificadas por edicto.

Que las señoras **Anirley Chaves Baloyer** y **Sonny Rentaría Romaña** no presentaron sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas 26 productos equivalentes a 509 **UNIDADES de MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIFERENTES**, tales como:

Medicamentos Prohibidos (vencidos).

Medicamentos Fraudulentos (sin registro sanitario del INVIMA).

Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques (sin el nombre del laboratorio fabricante y su ubicación, y sin fecha de vencimiento ni número de lote).

Todos estos productos fueron **decomisados** como **medida sanitaria de seguridad**, y se dejaron copias de las actas levantadas con ocasión de las visitas.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades publicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.*

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS** O **ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que **MEDICAMENTO** "es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnostico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado".

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le dé un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento.

Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdichan mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la **Droguería Sol y Vida**, del Municipio de Medellín.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste son fraudulentos, estando prohibida su tenencia. **Artículo 2º y 77 parágrafo 2º del Decreto 677 de 1995.**

Con respecto a los medicamentos sin el nombre del laboratorio fabricante y su ubicación, y sin número de lote, se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2º del Decreto 677 de 1995, que define que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que "...Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado", de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado,

y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

ANÁLISIS DE CULPABILIDAD:

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizadas al establecimiento, se le atribuye a los investigadores, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos farmacéuticos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil:

"La ley distingue tres especies de culpa y descuido:

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

ESCALA DE SANCIONES:

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
- c) Decomiso.
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.

Tener Productos Farmacéutico Prohibidos, Alterados, Fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, **SIN IMPORTAR LA CANTIDAD QUE SEA**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Así mismo los significativos hallazgos denotan su desacato a la normatividad sanitaria vigente y constituyen lo que en derecho se denomina **FLAGRANCIA**; además la prueba física existente, compone la evidencia no controvertida y menos desvirtuada de que cuando se practicó la visita por parte de los funcionarios de ésta Secretaría, efectivamente se detectaron las anomalías que tipifican las infracciones que se le imputaron a los involucrados.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería Sol y Vida** del municipio de Medellín, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Anirley Chaves Baloyer** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.038.797.827 en su calidad de **Propietaria** de la **Droguería Sol y Vida** ubicada en la Carrera 31 No. 107-19 del Municipio de Medellín, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CINCUENTA (50), SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, al momento del fallo, y a la señora **Sonny Rentería Romaña**, identificada con cédula de ciudadanía N°32.289.468, en su calidad de **Administradora y Directora responsable** con **MULTA** equivalente a **CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las implicadas, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Las sancionadas deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando

oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

05 DIC 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 048017

05 DIC 2011

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 24 de Septiembre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Droguería Cosméticos y Droguería La 33**, ubicada en la Calle 45 No.32-62 del Municipio de Medellín, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Rosmira Maria Restrepo Zuluaga**,

identificada con cédula de ciudadanía N°43.036.318 y su **Administradora**, la señora **Gladys María Restrepo Zuluaga**, titular de la cédula de ciudadanía N°43.079.028.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N°08447 de Junio 30 de 2011, se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N°08501 de Julio 14 de 2011 contra la señora **Rosmira María Restrepo Zuluaga**, en su calidad de **Propietaria**, y contra la señora **Gladys María Restrepo Zuluaga, Administradora** de la **Droguería Cosméticos y Droguería La 33**, por infringir los artículos 72 del Decreto 1950 de 1964; artículos 13, 72 literales a), d) y Parágrafo 1 y artículo 77 parágrafos 1 y 2 del Decreto 677 de 1995; artículos 11 numeral 2 y 20 numeral 3 del Decreto 2200 de 2005; artículo 16 y 54 literales b) y e) del Decreto 4725 de 2005; literal b) numeral 3 del artículo 8 de la Resolución 1403 de 2007; inciso final numeral 2.1. y literal d) numeral 2.2. Capítulo V Título I y literal j) numeral 3.2. Capítulo II Título II del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico, adoptado mediante Resolución 1403 de 2007.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a las citadas señoras, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Se hallaron en condiciones irregulares y anómalas 15 productos equivalentes a **231 UNIDADES de MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIFERENTES**, tales como:

Medicamentos Prohibidos (vencidos).

Medicamentos Fraudulentos (Introducidos al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales; sin registro sanitario del INVIMA).

Medicamentos que Incumplían las Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques (Con indicaciones terapéuticas, sin el nombre del laboratorio fabricante y su ubicación, y sin número de lote).

Todos estos productos fueron **decomisados** como **medida sanitaria de seguridad**, y se dejaron copias de las actas levantadas con ocasión de las visitas.

Al respecto, los parágrafos primero y segundo del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, hacen referencia a las **PROHIBICIONES** para los establecimientos farmacéuticos, señalando con notoria claridad:

*"PARÁGRAFO PRIMERO: Se prohíbe la **TENENCIA** o la **VENTA** de productos farmacéuticos que se presenten en envase tipo hospitalario, que sean distribuidos por entidades públicas de seguridad social, de muestras médicas y de productos farmacéuticos con la fecha de vigencia, expiración o caducidad vencida o sin*

registro sanitario, en las droguerías, depósitos de drogas, farmacias droguerías y establecimientos similares.

*"PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la fabricación, **TENENCIA** o **VENTA** de productos farmacéuticos **FRAUDULENTOS** O **ALTERADOS** en los establecimientos farmacéuticos".*

Igualmente el Decreto 677 de 1995, en su artículo 2° parágrafo 2, establece que MEDICAMENTO "es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado".

Por lo anterior es pertinente señalar la importancia de tener un Director Responsable en la droguería que cumpla con sus funciones, para que en ejercicio de las mismas le dé un adecuado manejo a los medicamentos y al establecimiento farmacéutico, por ello es necesario que este mantenga una permanente dirección, de buen manejo y cuidado en cuanto a los medicamentos que ingresan, y salen del establecimiento. Observamos que por falta de diligencia y cuidado se encontraron en el establecimiento, medicamentos en diferentes situaciones que desdichan mucho del desempeño de sus responsabilidades, y efectivamente ponen en riesgo la salud individual y colectiva de la población usuaria de la **Droguería Cosméticos y Droguería la 33**, del Municipio de Medellín.

En la visita realizada a la droguería pudo evidenciarse la falta de Director Responsable por lo que el establecimiento fue **CLAUSURADO** como medida sanitaria de seguridad la cual fue **LEVANTADA** una vez fue contratada la persona idónea para desempeñar esa función.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los medicamentos prescritos por sus médicos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades.

En cuanto a los medicamentos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el Decreto 677 de 1995, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender los medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico, por lo tanto los productos que no cuentan con éste son fraudulentos, estando prohibida su tenencia. **Artículo 2° y 77 parágrafo 2° del Decreto 677 de 1995.**

Con respecto a los medicamentos sin el nombre del laboratorio fabricante y su

ubicación, y sin número de lote, se está desconociendo con ello el literal d) del artículo 2º del Decreto 677 de 1995, que define que medicamento no solo es su parte constitutiva sino que "...Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado", de acuerdo a la definición de éste en el artículo 2º del Decreto 677 de 1995.

Es importante resaltar que la información de la fecha de vencimiento y lote, la llevan en el empaque, rótulo y etiqueta y que los que estaban fuera del empaque secundario, al carecer de esta información son motivo de decomiso y además puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación, etc., de medicamentos.

Al respecto, este Despacho considera, que desde mucho tiempo antes, cuando por vez primera se reglamentó en nuestro país el ejercicio de la química farmacéutica y de la farmacia mediante la Ley 23 de 1962, claramente se determinó, en su artículo 2º que ello ***"implica una función social de cuyo cabal desempeño son responsables los profesionales que la ejercen"***.

Si la práctica de la farmacia no tuviera mayor incidencia en la sociedad, tal actividad podría ejercerse libremente, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política. Pero las consecuencias del ejercicio arbitrario o irresponsable de la misma tienen tanto calado en el núcleo social, que no en vano viene reglamentándose su práctica desde la expedición de la ley 23 de 1962, con el establecimiento de severas sanciones a quienes no se ciñan a lo allí estipulado, y lo único que buscan es la protección de los intereses y derechos colectivos, y entre ellos, uno de los más preciados después de la vida, como es el de la salud.

Los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

*"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. **Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios**" (Negrilla fuera de texto).*

ANÁLISIS DE CULPABILIDAD:

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizadas al establecimiento, se le atribuye a los investigados, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos farmacéuticos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil:

"La ley distingue tres especies de culpa y descuido:

***Culpa grave, negligencia grave, culpa lata**, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.*

***Culpa leve, descuido leve, descuido ligero**, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.*

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

***Culpa o descuido levísimo** es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.*

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".

ESCALA DE SANCIONES:

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y 125 del Decreto 677 de 1995, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
- c) Decomiso.
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico

o edificación o servicio respectivo.

Tener Productos Farmacéutico Prohibidos, Alterados, Fraudulentos, que incumplan Normas de Calidad en Etiquetas, Rótulos y Empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, **SIN IMPORTAR LA CANTIDAD QUE SEA**, ponen en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Así mismo los significativos hallazgos denotan su desacato a la normatividad sanitaria vigente y constituyen lo que en derecho se denomina **FLAGRANCIA**; además la prueba física existente, compone la evidencia no controvertida y menos desvirtuada de que cuando se practicó la visita por parte de los funcionarios de ésta Secretaría, efectivamente se detectaron las anomalías que tipifican las infracciones que se le imputaron a los involucrados.

Es por ello por lo que los motivos de inconformidad planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietaria y Administradora**, les es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización, al por mayor o al menudeo, de medicamentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población; y se advierte que la aclaración que se hace en el numeral 8º con respecto al número de unidades es válido, pero es algo que no agrava la situación, ya que tanto el auto de cargos como esta resolución sancionatoria se hace teniendo en cuenta el grado de peligro que reviste para la comunidad el acta de visita que da cuenta de esta situación.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo medicamento en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, **está** por encima de cualquier consideración de

carácter particular. Tener en un establecimiento farmacéutico medicamentos y productos en las condiciones en que se encontraron en la **Droguería Cosméticos y Droguería La 33** del municipio de Medellín, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Rosmira María Restrepo Zuluaga**, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.036.318 en su calidad de **Propietaria** de la **Droguería Cosméticos y Droguería La 33** ubicada en la Calle 45 No.32-62 del Municipio de Medellín, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CINCUENTA (50), SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** y a la señora **Gladys María Restrepo Zuluaga**, identificada con cédula de ciudadanía N°43.079.028, en sus calidad de **y Administradora** con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las implicadas, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Las sancionadas deberán asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se les estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándoles que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

05 DIC 2011

Expedida en Medellín a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN No. 048018
05 DIC 2011

Por medio de la cual se decide sobre unos recursos

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, la Resolución 23483 de 2009 expedida por el señor Gobernador de Antioquia y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo reglamentado en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995 y a las Resoluciones 10911 de 1.992 y 1478 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que los días 19 y 20 de marzo de 2009, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección a la **ESE Hospital Iván Restrepo Gómez**, ubicada en la carrera 32 No.23-61 del municipio de Urrao, Antioquia, cuyo representante legal es el señor **Sergio de Jesús López Usuga**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.250.337 y su **Director Responsable** el señor **Javier Ariel Mora Guzmán**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.775.773 y con Título de Tecnólogo en Regencia de Farmacia inscrito en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el número 5-0808-93.

Que por Auto No. 18245 del día 30 de Diciembre de 2010, se inició la presente investigación y mediante Auto No.354 del día 08 de febrero de 2011 se formularon cargos a los señores **Sergio de Jesús López Usuga y Javier Ariel Mora Guzmán** en sus calidades de **Representante legal y Director Responsable** de la **ESE Hospital Iván Restrepo Gómez**.

Que analizado el merito del sumario y los argumentos planteados y las pruebas aportadas en los descargos presentados, mediante Resolución No.023132 del 11 de Agosto de 2011 se sancionó a los señores **Sergio de Jesús López Usuga y Javier Ariel Mora Guzmán**, con Multas equivalentes a VEINTE (20) y TREINTA (30) SMDLV respectivamente.

Que debidamente notificada la decisión, a los citados señores, el señor **Javier Ariel Mora Guzmán interpuso** contra ésta, recurso de Reposición y en subsidio de Apelación,

dentro del término de ley.

Para resolver se considera lo siguiente,

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:

Al momento de imponer la sanción, se observa que se tuvo como circunstancia atenuante para el señor **Javier Ariel Mora Guzmán**, el hecho de no haber sido sancionado antes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 del Decreto 677 de 1995, siempre partiendo del hecho de que los productos farmacéuticos se encontraron en condiciones que si atentan contra la salud, el bienestar y la vida de la comunidad.

DEBIDO PROCESO

Se indica que la presente investigación se adelantó respetando el principio constitucional del debido proceso, de acuerdo a los lineamientos de los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, respetando desde sus inicios el derecho a la defensa; es así como desde la notificación de los cargos a la implicada, expresamente se le advirtió de acuerdo al artículo 118 del Decreto 677 de 1995, que gozaba de un término de diez (10) días hábiles para presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que sean conducentes para su defensa, y que además tenía derecho a hacerse asistir de un abogado.

POSTULADOS NORMATIVOS

En ningún momento han sido violados por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ni principios ni derechos, toda vez que el señor **Javier Ariel Mora Guzmán**, fue sancionado conforme a las normas sanitarias vigentes, con recaudación de prueba real y verdadera (acta de visita y decomiso) y con observancia plena y propia del proceso Administrativo Sancionatorio.

ANÁLISIS DE CULPABILIDAD

Sobre la responsabilidad en los hechos, en un aparte de la resolución recurrida se indica claramente que dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones a la normatividad sanitaria vigente, y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa se hace acreedor a una sanción.

Además no existen pruebas o argumentos diferentes a los que se expusieron en el escrito de descargos y que fueron valorados al momento de aplicar la sanción, aunque si es necesario aclarar que con relación a la certificación No.2005018768 del INVIMA, ésta no tiene validez probatoria, ya que tiene como fecha de expedición el 12 de Septiembre de 2005, y en ella consta que tendrá una vigencia de doce (12) meses, no obstante es presentada para que obre como prueba el 11 de Marzo de 2011, y que a la fecha de la visita, Marzo 19 de 2009, el dispositivo ya requería registro sanitario, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005.

MULTA

En cuanto a la sanción monetaria, este Despacho indica que la misma resulta equitativa en relación con los significativos hallazgos y con el límite traído por el artículo 125 del Decreto 677 de 1995, literal b), el cual indica que puede aplicarse "**Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES**".

En ese caso concreto la cuantía de la multa no supera los TREINTA (30) SMLDV, debido a la no existencia de antecedentes, como ya se indicó, y al grado del riesgo a que se vio expuesta la salud pública.

No existen fundamentos entonces, ni de hecho ni de derecho, para modificar en modo alguno las determinaciones adoptadas mediante la resolución recurrida, por lo que no habrá de reponerse, y se concederá el recurso de apelación ante el Señor Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, disponiéndose su remisión al señor Secretario Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para que desate el recurso de **apelación** interpuesto como subsidiario del de reposición.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 023132 del día 11 de Agosto de 2011, por medio de la cual se impone una sanción al señor **Javier Ariel Mora Guzmán**, identificado con cédula de ciudadanía No.4.775.773 y con título de Tecnólogo en Regencia de Farmacia inscrito en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con el No.5-0808-93, en su calidad de **Director Responsable**, de la **ESE Hospital Iván Restrepo Gómez** ubicada en la carrera 32 No.23-61 del Municipio de Urrao, Antioquia con **MULTA** equivalente a **TREINTA (30) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, por las consideraciones realizadas en la parte motiva de ésta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En el efecto suspensivo, se concede el **Recurso de Apelación** interpuesto subsidiariamente al de reposición.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los 05 DIC 2011

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELKIN DARÍO DEL VALLE GARCÉS

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia